



UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
ESCUELA DE POSGRADO



MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

“La revisión de sentencias absolutorias firmes derivadas de un proceso penal basado en prueba falsa o con violación de funciones del Órgano Jurisdiccional, como excepción al Principio de Cosa Juzgada”

TESIS

Presentada para optar el Grado Académico de Maestro en Derecho con mención en Constitucional y Gobernabilidad

AUTOR:

Abg. Tongo Navarro, Alex Iván

ASESOR:

Dr. Hernández Rengifo, Freddy Widmar

LAMBAYEQUE - PERÚ

2022

“La revisión de sentencias absolutorias firmes derivadas de un proceso penal basado en prueba falsa o con violación de funciones del Órgano Jurisdiccional, como excepción al Principio de Cosa Juzgada”



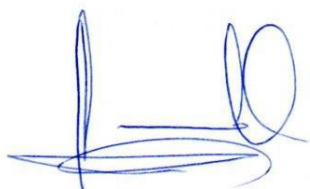
Abg. Alex Iván Tongo Navarro
Autor



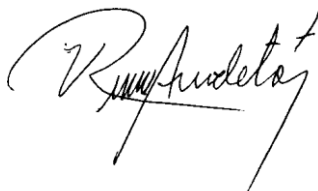
Dr. Freddy Widmar Hernández Rengifo
Asesor

Tesis presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para optar el Grado Académico de: MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

Aprobado por:



Dr. Walther Jaime Ramos Manay
Presidente del Jurado




Dr. Víctor Ruperto Anacleto Guerrero
Secretario del Jurado



Mg. Mary Isabel Colina Moreno
Vocal del Jurado

Lambayeque, 2022

ACTA DE SUSTENTACIÓN (COPIA)

 UNPRG <small>UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO</small>	ESCUELA DE POSGRADO <i>M. Sc. Francis Villena Rodríguez</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	29-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACION	<u>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS</u>	Pág. 1 de 3	

ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS

Siendo las **1pm.** del miércoles 1 de junio de 2022, se dio inicio a la Sustentación Virtual de Tesis soportado por el sistema Google Meet, preparado y controlado por la Unidad de Tele Educación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, con la participación en la Video Conferencia de los miembros del Jurado, nombrados con Resolución N°601-2021-EPG, de fecha 11 de agosto de 2021, conformado por:

Dr. WALTHER JAIME RAMOS MANAY	Presidente
Dr. VICTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO	Secretario
Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO	Vocal
Dr. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO	Asesor

Para evaluar el informe de tesis del tesista ALEX IVAN TONGO NAVARRO, candidato a optar el grado de MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD con la tesis titulada "LA REVISIÓN DE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS FIRMES DERIVADAS DE UN PROCESO PENAL BASADO EN PRUEBA FALSA O CON VIOLACIÓN DE FUNCIONES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA".

El Sr. Presidente, después de transmitir el saludo a todos los participantes en la Video Conferencia de la Sustentación Virtual ordenó la lectura de la Resolución N°542-2022-EPG de fecha 18 de mayo de 2022, que autoriza la Sustentación Virtual del Informe de tesis correspondiente, luego de lo cual autorizó al candidato a efectuar la Sustentación Virtual, otorgándole **30** minutos de tiempo y autorizando también compartir su pantalla.

Culminada la exposición del candidato, se procedió a la intervención de los miembros del jurado, exponiendo sus opiniones y observaciones correspondientes, posteriormente se realizaron las preguntas al candidato.

Culminadas las preguntas y respuestas, el Sr. Presidente, autorizó el pase de los miembros del Jurado a la sala de video conferencia reservada para el debate sobre la Sustentación Virtual del Informe de tesis realizada por el candidato, evaluando en base a la rúbrica de sustentación y determinando el resultado total de la tesis con **17** puntos, equivalente a

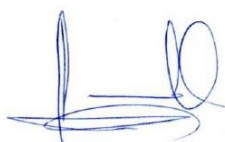
Formato : Físico/Digital	Ubicación : UI- EPG - UNPRG	Actualización:
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------

 UNPRG <small>UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ PÉREZ GALLardo</small>	ESCUELA DE POSGRADO <i>M. Sc. Francis Villena Rodríguez</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	29-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACION	FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS	Pág. 2 de 3	

BUENO, quedando el candidato apto para optar el Grado de MAESTRO EN DERECHO CON MENCION EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD.

Se retornó a la Video Conferencia de Sustentación Virtual, se dio a conocer el resultado, dando lectura del acta y se culminó con los actos finales en la Video Conferencia de Sustentación Virtual.

Siendo las **2 p.m.** se dio por concluido el acto de Sustentación Virtual.



Dr. WALTER JAIME RAMOS MANAY
PRESIDENTE



Dr. VICTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO
SECRETARIO



Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
VOCAL

Dr. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO
ASESOR



Formato : Físico/Digital	Ubicación : UI- EPG - UNPRG	Actualización:
--------------------------	-----------------------------	----------------

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD

Yo, Alex Iván Tongo Navarro, investigador principal, y Freddy Widmar Hernández Rengifo, asesor del trabajo de investigación **“LA REVISIÓN DE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS FIRMES DERIVADAS DE UN PROCESO PENAL BASADO EN PRUEBA FALSA O CON VIOLACIÓN DE FUNCIONES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA”**, declaramos bajo juramento que este trabajo no ha sido plagiado, ni contiene datos falsos. En caso se demostrará lo contrario, asumo responsablemente la anulación de este informe y por ende el proceso administrativo a que hubiere lugar. Que puede conducir a la anulación del título o grado emitido como consecuencia de este informe.

Lambayeque, 30 de abril de 2021.



Abg. Alex Iván Tongo Navarro

Investigador



Dr. Freddy Widmar Hernández Rengifo

Asesor

DEDICATORIA

A mis padres Gloria y Mariano, a mis hermanos Jessica y Pieer, y a mi esposa Angélica; por ser quienes son mi inspiración y motivación para superarme cada día en todos los aspectos de mi vida.

AGRADECIMIENTO

A Dios que guía mis pasos, a los docentes de mi alma mater: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, por todas las enseñanzas impartidas y valores inculcados; y de forma especial, a mi asesor, Dr. Freddy Hernández Rengifo por la orientación brindada.

INDICE GENERAL

Contenido

ACTA DE SUSTENTACIÓN (COPIA)	ii
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
INDICE GENERAL	vii
ÍNDICE DE GRÁFICOS	viii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
INTRODUCCION	11
CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO	19
1.1. Antecedentes de la Investigación:	20
1.2. Base Teórica.	20
1.2.1. El Principio de Cosa Juzgada.....	20
1.2.2. Derecho al Recurso como una manifestación del Derecho de Doble Instancia.	21
1.2.3. La Doble Instancia como derecho de configuración legal.....	23
1.2.4. El Principio de Doble Conformidad	23
1.2.5. El recurso de apelación	24
1.2.6. El Recurso de Casación.....	25
1.2.7. Acción de Revisión.....	26
1.3. Hipótesis	42
1.4. Variables	43
CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES	44
2.1. Tipo de Investigación:	45
2.1.1. De acuerdo al fin que persigue.	45
2.1.2. De acuerdo al diseño de investigación.....	45
2.2. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.	45
2.3. Diseño de Contrastación	46
2.4. Población y muestra.....	46
2.5. Técnicas, Instrumentos y Materiales de Recolección de Datos	46
CAPÍTULO III: RESULTADOS	47
1. Descripción del trabajo de campo	48

2. Presentación de gráficos de los datos obtenidos de las encuestas realizadas en la presente investigación.....	48
3. Análisis de los resultados obtenidos de las muestras representadas en gráficos	59
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN	64
1. Discusión de los Resultados.....	65
2. Propuesta de la presente investigación	67
CONCLUSIONES	69
RECOMENDACIONES.....	71
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	72
ANEXOS	74

ÍNDICE DE GRÁFICOS

gráfico 1.....	49
gráfico 2.....	50
gráfico 3.....	51
gráfico 4.....	52
gráfico 5.....	53
gráfico 6.....	54
gráfico 7.....	55
gráfico 8.....	56
gráfico 9.....	57
gráfico 10.....	58

RESUMEN

En el presente estudio se ha elegido analizar la problemática a partir de la posibilidad de formular el recurso de revisión, previsto por el artículo 439° del Código Procesal Penal no sólo cuando existiese una sentencia condenatoria con la calidad de cosa juzgada, principio establecido en el artículo 139°, inciso 3 de la Constitución Política del Perú y el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Penal, sino también para supuestos en donde se ha emitido un fallo absolutorio debido a la utilización de prueba falsa, valorada durante el juicio y que determinó la absolución de una persona o se ha obtenido dicha absolución a consecuencia de un acto en violación de las funciones por parte del magistrado (juez penal de la Corte Suprema, Sala Superior, o Juzgado Penal, en donde haya quedado consentida la sentencia), supuesto que ha sido acogido tanto por la Corte Interamericana de Derechos en el caso Óscar Alberto Mohamed vs. Argentina, como en otras legislaciones, como el caso de Colombia.

ABSTRACT

In the present study, it has been chosen to analyze the problem from the possibility of formulating the appeal for review, provided for by article 439° of the Code of Criminal Procedure not only when there is a conviction with the quality of *res judicata*, a principle established in the Article 139°, paragraph 3 of the Political Constitution of Peru and Article III of the Preliminary Title of the Criminal Procedure Code, but also for cases where an acquittal has been issued due to the use of false evidence, assessed during the trial and determined the acquittal of a person or the acquittal has been obtained as a result of an act in violation of the functions by the magistrate (criminal judge of the Supreme Court, Superior Chamber, or Criminal Court, where the sentence has been consented), supposed that has been accepted both by the Inter-American Court of Rights in the case *Óscar Alberto Mohamed vs. Argentina*, as in other laws, such as the case of Colombia.

INTRODUCCION

Si bien es cierto desde el año 2001, el pueblo peruano ha sido testigo de terribles actos de corrupción del gobierno fujimontesinista de ese entonces, gracias a la difusión del primer vlavideo, en donde se ve como Alex Kouri recibe \$15,000 dólares para pasarse de la bancada de Perú Posible al partido del oficialismo y los que le sucedieron de mucho más gravedad y que comprometió a muchos políticos, jueces y empresarios; en la actualidad se vive una historia parecida e incluso peor, pues pese a los desenlaces fatales para la democracia y a que siempre e irremediabilmente la verdad es descubierta, no se ha aprendido la lección, de este modo en el año 2018 se publicaron una serie de audios que generaron el destape de corrupción judicial más grande de los últimos tiempos en nuestro país, que se trajo abajo un órgano constitucional autónomo, el Consejo Nacional de la Magistratura y decretó el estado de emergencia del Poder Judicial, al evidenciarse la compra de la justicia por parte de incluso organizaciones criminales a cambio de la libertad de sus integrantes, como el caso de Caracol el traficante de drogas más peligroso de Callao, a quien se le escucha en un audio conversando con uno de sus secuaces y comentándole como un juez de sala le ha solicitado 30,000 dólares a cambio que su voto resulte a su favor; así también el caso de un juez de la Corte Suprema que negociaba la pena a un violador de una menor de edad, a fin de imponer una pena de poca gravedad, tal como se pudo escuchar de los audios publicados por el Instituto de Defensa Legal IDL Reporteros.

Ante tan desolador panorama, cabe preguntarnos ¿Cuántas veces en la instancia judicial se habrá negociado la libertad de una persona responsable por la comisión de un delito? ¿Existe alguna forma de revisar una sentencia absolutoria con calidad de cosa juzgada derivada de un acto de corrupción por parte el magistrado que conoció el caso o ante supuestos de prueba falsa?

Como bien sabemos la cosa juzgada, consagrado en el artículo 139°, inciso 13 de la Constitución Política del Perú, significa que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla, siendo esto último lo que denominamos la inmutabilidad de la cosa juzgada.

Como respuesta a la primera pregunta, resulta sencillo dar una respuesta afirmativa, más aún con la develación de los referidos audios que son el testimonio directo de los actos de corrupción dentro de toda la esfera del Poder Judicial en todos sus niveles.

Ahora bien, para responder a la segunda interrogante, debemos partir que, en materia procesal se ha regulado el recurso de revisión, que implica a todas luces una excepción de la cosa juzgada el cual resulta aplicable en casos muy particulares, como los taxativamente expresados en el texto normativo y que están orientados a criterios de justicia, cuando se desvirtúa la responsabilidad de una persona

condenada, ello ha quedado establecido en el artículo III del Título Preliminar Código Procesal Penal, en donde se instituyen los principios extraídos de la Constitución Política y que rigen todo el ordenamiento procesal penal, al señalar que la excepción a la cosa juzgada o interdicción de la persecución penal múltiple *"es la revisión por la Corte Suprema de la sentencia condenatoria expedida en alguno de los casos en que la acción está indicada taxativamente como procedente en el código"*.

No obstante, dicha vía solo es aplicable para la revisión de sentencias condenatorias injustas, dejando de lado el hecho que pueden también emitirse fallos absolutorios injustos, como los ya mencionados a modo de ejemplo, en los párrafos precedentes, circunstancia que no ha sido recogida por el Código Procesal Penal, pese a que la realidad social se impone y sobrepasa a la norma positivizada, por tanto no se cuenta a la fecha con un mecanismo procesal penal que pueda aplicar para revisar sentencias absolutorias obtenidas injustamente y que además de ello dicha facultad le corresponda a los agraviados, inconformes ante la respuesta negativa de la justicia de resolver un conflicto del cual son los perjudicados con las consecuencias del delito.

En términos generales se sostiene que la revisión es una vía en donde lo que se va a llevar a cabo es la reevaluación respecto a la inocencia de una persona condenada mediante una sentencia cuya decisión es cuestionada por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 439° del Código Procesal Penal, el cual señala que

procede la revisión de las sentencias condenatorias firmes procede, sin limitación temporal y sólo a favor del condenado, en los siguientes casos:

1. “Cuando después de una sentencia se dictará otra que impone pena o medida de seguridad por el mismo delito a persona distinta de quien fue primero sancionada, y no pudiendo conciliarse ambas sentencias, resulte de su contradicción la prueba de la inocencia de alguno de los condenados.
2. Cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la calidad de cosa juzgada.
3. Si se demuestra que un elemento de prueba, apreciado como decisivo en la sentencia, carece de valor probatorio que se le asignara por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación.
4. Si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba, no conocidos durante el proceso, que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado.
5. Cuando se demuestre, mediante decisión firme, que la sentencia fue determinada exclusivamente por un delito cometido por el Juez o grave amenaza contra su persona o familiares, siempre que en los hechos no haya intervenido el condenado.
6. Cuando la norma que sustentó la sentencia hubiera sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en un caso concreto por la Corte Suprema”.

Como puede verse, todas las causales han sido diseñadas para ser aplicados a casos de sentencias condenatorias, existiendo un vacío normativo respecto a la existencia de sentencias absolutorias obtenidas injustamente, como podría ser mediante actos de violación de funciones por parte del juez o basados en pruebas falsas, pues si el recurso de revisión es considerado una excepción al principio constitucional la cosa juzgada, nada obsta a que lo sea también para el caso de sentencias absolutorias, ello claro está bajos parámetros estrictos y taxativos que no permitan una generalización y se filtren solo los casos que encajen en las causales a establecer y que serán el aporte de la presente investigación, debiendo tener en cuenta además que el legitimado para interponer dicha acción sería el afectado con el delito, agraviado o actor civil.

A mayor abundamiento, tenemos que la Corte IDH, por medio de su Doctrina Jurisprudencial señala a través del caso Almonacid Arellano y otros vs Chile en cuya sentencia de fondo del 26 de setiembre de 2006 en la segunda parte del párrafo 154 refiere que *“si es un caso en concreto aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, ya que, se dice, las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas así como la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del non bis in ídem.*

Asimismo, a nivel de legislación comparada, es importante precisar que ya el Código de Procedimiento Penal Colombiano ha abordado el tema así en su artículo 192° inciso 5 y 6 señala que es procedente la acción de revisión contra sentencias ejecutoriadas:

Inciso 5.- Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero.

Inciso 6.- Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus conclusiones.

En ese sentido señala que dicho numerales se aplicaran también en los casos de preclusión y sentencia absolutoria.

Es en base a esas fuentes de derecho que elaboraremos nuestra propuesta legislativa, a efectos de aportar a la comunidad jurídica y a la resolución de conflictos que en efecto son parte de la realidad en la que nos encontramos actualmente, siendo que la revisión de sentencias absolutorias también debe constituir una excepción válida del Principio Constitucional de Cosa Juzgada

Por ello se ha formulado la siguiente pregunta problemática ¿En qué medida debería proceder una acción de revisión si una sentencia absolutoria firme es obtenida dentro un proceso penal basado en prueba falsa o con violación de funciones por parte del juez que emitió el fallo?

El objetivo general es establecer en qué medida debería proceder una acción de revisión si una sentencia absolutoria firme es obtenida dentro un proceso penal

basado en prueba falsa o con violación de funciones por parte del juez que emitió el fallo.

Los objetivos específicos son:

Describir cada uno de los principios e institutos de índole constitucional vinculados a la acción de revisión como excepción a la cosa juzgada

Analizar los supuestos que deberían ser susceptibles de ser revisados mediante la acción de revisión cuando se hayan emitido sentencias absolutorias y tengan la calidad de cosa juzgada.

Proponer, una modificación legislativa de *lege ferenda* de la normativa relativa a la acción de revisión, a fin que resulte aplicable también a los casos de fallos absolutorios injustos.

Asimismo, consideramos que la presente investigación se justifica y tiene relevancia jurídica en razón a que no solo debería ser procedente la revisión para el caso sentencias condenatorias, sino que también debería extenderse a sentencias absolutorias ya que, al ser la acción de revisión un medio válido para superar la cosa juzgada, pues, el derecho no puede legitimar bajo el pretexto de seguridad jurídica absoluciones logrados mediante actos de falsedad o fraude en la presentación y sustanciación del acervo probatorio o a consecuencia de la violación de las funciones del magistrado -tráfico de influencias, cohecho e inclusive prevaricato .que conllevan a una decisión injusta o ilegal, al evadir definitivamente la acción del *ius puniendi* del Estado a una persona responsable de la comisión de un delito.

La importancia del presente trabajo radica en que, de cara a nuestra actualidad nacional, en donde desde el año 2018 se pudo descubrir -lo que era un secreto a voces- la enorme red de corrupción enquistada en los poderes del Estado, en donde el Poder Judicial estaba inmerso desde los órganos de primera instancia hasta las más altas esferas de la Corte Suprema, poniéndose al descubierto incluso la negociación de sentencias absolutorias entre jueces e interesados, por lo que resulta indispensable la regulación que permita volver a revisar casos en donde se presenten las causales consistente en actos de falsedad o fraude en la presentación y sustanciación del acervo probatorio o a consecuencia de la violación ilegal de las funciones del magistrado.

CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO

1.1. Antecedentes de la Investigación:

Pese a la búsqueda de material físico y virtual respecto al tema, materia de investigación, no ha logrado ubicarse una tesis que analice la problemática expuesta.

1.2. Base Teórica.

1.2.1. El Principio de Cosa Juzgada

La cosa juzgada establecida en el art.139°, inc. 13 de la Constitución, el cual a la letra señala lo siguiente: *“la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada”*.

Por su parte el Tribunal constitucional en la STC 4587-2004-AA, FJ. 38. señala que “mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no

pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó”.

Blasco (1994) refiere que:

“El valor formal de la cosa juzgada reside en que contra una decisión final no se puede impugnar con ningún recurso; no existe ya posibilidad de modificar la sentencia, ello significa que procesalmente es imposible que el fallo decretado en la resolución que pone fin al conflicto sea frontalmente atacado, esta es la característica de la atacabilidad. Esto implica una circunstancia interior de la sentencia que señala la finalización del proceso. Es firme desde el momento en que es dictada sin que pueda ser recurrida” (p. 41).

1.2.2. Derecho al Recurso como una manifestación del Derecho de Doble Instancia.

Conforme lo ha expuesto el Supremo Intérprete de la Constitución, analizado en párrafos precedentes el derecho de doble instancia tiene respecto al derecho a recurso una relación de género – especie, aunque en la práctica ambos términos sirvan para definir en igual medida a la garantía brindada por el ordenamiento jurídico – constitucional y a su vez el derecho de todo justiciable de acudir a una instancia superior, a fin que la decisión que puso fin a un proceso en un primer nivel jerárquico sea

revisada íntegramente, ello mediante la aplicación de un mecanismo idóneo de impugnación, teniendo como fundamento la falibilidad humana y la búsqueda de la justicia como fin último.

Recurriendo a la doctrina española De la Oliva, Aragoneses, Hinojosa, Muerza, & Tome (2007), refieren que el derecho a al recurso:

Se extiende como un mecanismo orientado a maximizar las posibilidades de obtención de una sentencia justa y como garantía procesal de parte. Así pues, el fundamento último de los recursos reside en la falibilidad humana, el considerar que los jueces pueden aplicar o interpretar erróneamente una norma material o procesal, y que, por tanto, hace falta cuestionar tal decisión, a fin de que ésta sea modificada o anulada por un órgano jurisdiccional superior, o cuando se trata de resoluciones más simples, por el mismo juez que la emitió (p. 580).

En cuanto al fundamento del derecho a la doble instancia, señala (Calderón, 2005) que se inspira en dos ideas básicas:

La jerarquía en la jurisdicción y la fiabilidad de los jueces, señalando que la segunda instancia evolucionó de la concepción jerárquica-autoritaria de la jurisdicción para convertirse en un derecho, en una garantía procesal de índole constitucional. (p. 41)

A efectos de la presente investigación, no consideramos necesario establecer un deslinde -el cual es meramente abstracto- entre los principios antes señalados, por lo que emplearemos la denominación más

común y amplia, es decir, el derecho a la doble instancia o instancia plural, como garantía que puede verse vulnerada en caso se apliquen literalmente los artículos 419, inciso 2 y 425, inciso 3, literal b) del Código Procesal que establecen la condena del imputado absuelto.

1.2.3. La Doble Instancia como derecho de configuración legal

Es el Tribunal Constitucional el que ha precisado en su diversa doctrina jurisprudencial que el derecho de doble instancia se erige como un derecho de configuración legal, así ha recalcado en el Exp. N° 05410-2013-PHC/TC La Libertad, caso Roberto Carlos Flores Paiva:

“El derecho a los medios impugnatorios, es uno de configuración legal conforme lo ha establecido en la STC 4235-2010-HC/TC: “...el derecho a los medios impugnatorios es un derecho de configuración legal, mediante el cual se posibilita que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional superior” (Cfr. SSTC 5194-2005-PA, fundamento 4; 10490-2006-PA, fundamento 11; 6476-2008-PA, fundamento 7).

1.2.4. El Principio de Doble Conformidad

Para Maier (2003) consiste básicamente

En la aplicación concreta del Principio de Doble Instancia al proceso penal, en donde se le confiere al condenado la facultad de “acudir,

voluntariamente a la instancia de revisión -el mecanismo para fiscalizar la doble conformidad- siendo que en el supuesto de estar de acuerdo integral o parcialmente con el Tribunal de Juicio, otorgaría fundamento regular a la condena” (p. 713).

Peña Cabrera (2011) critica esta posición doctrinaria en el sentido que, llevada a sus últimas consecuencias, en materia procesal penal, el derecho al recurso quedaría reducido a la facultad otorgada al imputado de impugnar toda decisión judicial que implique una condena o que tenga efectos jurídicos gravosos, siendo que, en el caso de expedirse sentencias absolutorias, serían inimpugnables, inalterables, ya que no sería permitido poner en riesgo la libertad del imputado (p. 16).

1.2.5. El recurso de apelación

Cubas (2015) señala que:

El recurso de apelación es un mecanismo de revisión de fallos judiciales de primera instancia mediante el cual se busca que el órgano jurisdiccional superior en jerarquía del que emitió la decisión impugnada realice una valoración de los argumentos del recurrente y deje sin efecto la resolución impugnada o la reemplace por otra que esté acorde a la norma (p. 602).

Entonces se trata de un mecanismo de impugnación del que se vale el recurrente, el cual busca la revisión de la decisión de modo que se ampare

sus planteamientos. No obstante, no se refieren a la capacidad probatoria que ostenta una segunda instancia.

Al respecto San Martín (2009), ofrece una concepción más completa al establecer que:

El recurso de apelación se orienta a una sentencia de instancia superior que reemplace a la primigenia. Adicionalmente, frente al principio de inmediación, autoriza -aunque limitadamente- la actuación de la prueba en segunda instancia (p. 15).

1.2.6. El Recurso de Casación

El artículo 427 del Código Penal en su numeral 1 señala que:

“El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento, y los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos en apelación por las Salas Penales Superiores”.

En ese sentido, podemos concluir, por la forma en que se haya regulado dicho recurso que no constituye un mecanismo impugnatorio de revisión integra., lo que lo convierte en un recurso de cognición limitada, ya que se puede cuestionar aspectos procesales, tales como errores procedimentales, aplicación de normas sustantivas o procesales, pero no es posible

cuestionar lo relativo a los medios probatorios que sustentaron una sentencia condenatoria.

1.2.7. Acción de Revisión

1.2.7.1. Naturaleza Jurídica

La revisión, sin duda alguna, ha sufrido profundos cambios en lo que a su naturaleza jurídica se refiere. Primero fue considerada como un recurso ordinario, luego fue calificada como un recurso extraordinario¹, finalmente, en el entendido de que no era propiamente un recurso ordinario ni extraordinario (dado que mediante estos recursos se busca impugnar resoluciones que no sean firmes, mientras que con la revisión sucede todo lo contrario: se ataca a resoluciones que tienen la calidad de cosa juzgada), se la entendió y se la entiende como una acción automática de impugnación².

¹ Se le entiende como extraordinario, según RODRÍGUEZ ARIAS, “por las restricciones legales como causales y limitación formal de admisibilidad cuyo fin es tutelar un interés superior de legalidad”. Citado por CARBONE, *La impugnación de la sentencia firme*, t. I, pp. 54-55.

² Las diferentes denominaciones que se le otorgan a la revisión, puede verse con mayor amplitud en: CARBONE, en *La impugnación de la sentencia firme*, t. I, pp. 53-55, así como en GORANSKY y RUSCONI, en *Los recursos en el procedimiento penal*, 2a ed., pp. 149-150.

Actualmente, la doctrina mayoritaria sostiene que la revisión es una acción autónoma de impugnación, en virtud de que con ella se cuestiona una decisión que tiene la calidad de cosa juzgada³.

Al respecto de la naturaleza jurídica sobre el recurso de revisión la doctrina ha mantenido diversas posturas, siendo dos las más importantes, el lado de la doctrina que la consideran como un recurso extraordinario o excepcional y el segundo sector doctrinal que lo considera una acción de impugnación autónoma que da origen a un proceso nuevo, cuya finalidad es rescindir una sentencia firme. Sin embargo, la doctrina moderna ha asumido la segunda de las tesis (Cáceres & Iparraguirre, 2021, p. 1144).

1.2.7.2. Concepto

La revisión es una acción de impugnación autónoma, de naturaleza excepcional, que procede únicamente cuando aparecen, con posterioridad a la emisión de la sentencia, pruebas o hechos nuevos que cuestionan una sentencia condenatoria firme.

Peña Cabrera (2019) señala que el recurso de revisión importa una especie de justicia *a posteriori* que tiene por objetivo reivindicar la inocencia del condenado mediante medios probatorios de suficiente envergadura que fundamentan dicha situación jurídica (p. 937).

³ Véase SAN MARTÍN CASTRO, Derecho procesal penal, t.II

Así mismo el referido autor citando a Roxin refiere que su idea básica descansa en la claudicación a la cosa juzgada, cuando se llega a conocer ulteriormente circunstancias que vislumbran que el fallo es incorrecto e injusto (ibidem. P. 937).

1.2.7.3. Fundamento

Admitiendo que en el proceso penal siempre existe la posibilidad de incurrir en error⁴, se prescribe -como un mecanismo excepcional y de último orden- la acción de revisión, cuya finalidad es la rescisión de las sentencias condenatorias injustas. La razón por la que existe la revisión no es la de corregir errores judiciales. La razón por la que existe la revisión no es la de corregir errores judiciales con relación a la apreciación o valoración de los elementos de prueba, sino que persiguen la corrección de una injusticia que proviene de determinados motivos expresamente establecidos en la ley⁵. Es decir, con la revisión no se busca el reexamen de la sentencia condenatoria, alegando vicios procesales o prueba insuficiente, sino la rescisión de una sentencia firme a la luz de pruebas o hechos nuevos⁶.

⁴ LEONE, Tratado de Derecho procesal penal, vol. III, p. 261.

⁵ PALACIO, Los recursos en el proceso penal, 3ª. Ed., p. 195.

⁶ Revisión de sentencia 218-2010 (cons. 2), Junín, 30 de noviembre de 2010. En esta línea, revisión de sentencia 100-2009 (cons. 1), Lima Norte, 29 de octubre de 2010.

Lo anterior, sin lugar a dudas, origina una clara tensión entre la seguridad jurídica y la justicia. En efecto, la contraposición entre estos dos valores se produce, debido a que el fundamento de la acción de revisión es la obtención material de la justicia, para lo cual es necesario desconocer una decisión que tiene la calidad de cosa juzgada y, en consecuencia, a la seguridad jurídica. Es decir, la justicia debe prevalecer, en caso de injusticias intolerables, sobre la seguridad jurídica.

Ante este conflicto, tanto la doctrina como la jurisprudencia se han decantado, mayoritariamente, a favor de la primera, ya que estiman que se debe preferir a la justicia frente a la seguridad jurídica o, dicho de otro modo, la justicia debe inexorablemente prevalecer ante la seguridad jurídica en un conflicto entre estos dos valores⁷.

En ese sentido se pronuncia ALMAGRO NOSETE, pues entiende que el “fundamento y fin de la revisión es hacer que prevalezca frente a la razón de seguridad jurídica que preponderadamente justifica la institución de la cosa juzgada y, por ello, su inmodificabilidad, la justicia del caso concreto, puesta de relieve por graves errores cometidos en el juicio sobre los hechos juzgados por causas que no pudieron tenerse en cuenta en el momento de dictar

⁷ Así, entre otros, los siguientes autores entienden que la justicia debe prevalecer frente a la seguridad jurídica: ARAGONESE, Instituciones de Derecho procesal penal, 5ª. Ed., pp. 553-554; SAN MARTÍN CASTRO, Derecho procesal penal, t. I, p. 1031; CUBAS VILLANUEVA, El nuevo proceso penal peruano, p. 534; PALACIO, Los recursos en el proceso penal, 3ª. Ed., p. 195.

sentencia. La conciencia de los ciudadanos tolera mal - afortunadamente- la condena del inocente; aun peor que la absolución del culpable”⁸.

Asimismo, cuando se presenta una controversia entre el derecho positivo y la justicia, también debe preferirse a esta última, tal como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional alemán, para quien “(...) en el caso de una contradicción insoportable entre el derecho positivo y la justicia, el principio de seguridad jurídica puede ser peor valorado que el de justicia material”⁹.

RADBRUCH, quien le otorga gran importancia al valor seguridad jurídica, plantea una solución particular para los casos en los que se presenten conflictos entre los valores de justicia y seguridad jurídica¹⁰.

En resumen, el fundamento de la acción de revisión se encuentra en la obtención de la verdad material y la justicia, incluso en menoscabo de la seguridad jurídica, ya que en un Estado social y democrático de Derecho no puede admitirse que sean inmutables decisiones

⁸ ALMAGRO NOSETE, en Instituciones de Derecho procesal penal, p.601.

⁹ Citado por ALEXY, Derecho injusto, retroactividad y principio de legalidad penal, <http://hdl.handle.net/10045/10248>.

¹⁰ Citado por TEPSICH. En: La impugnación de la sentencia firme, t. I, pp. 261-262. También véase ALEXY, Una defensa de la fórmula de Radbruch, <http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2019/1/AD-5-4.pdf>.

manifiestamente injustas. En otros términos, el fundamento para la existencia de la revisión se halla en la prevalencia, ante todo, de la verdad y la justicia frente a la seguridad jurídica, puesto que no otra cosa puede esperarse de un Estado que se estime respetuoso de los derechos fundamentales de los justiciables.

1.2.7.4. Causales de Procedencia

Las causales de la revisión son las que se encuentran taxativamente individualizadas en la ley, debido a que es un proceso autónomo que La revisión solo se justifica en casos de manifiesta injusticia, constituyendo tal hipótesis un verdadero *numerus clausus*, por lo que no es legítimo extenderlas a situaciones que puedan presentar semejanzas por vía de interpretación o de aplicación de disposiciones análogas.

En tal sentido, las causales de revisión, de modo general, pueden ser clasificadas en dos grupos: por un lado, tenemos la revisión por el descubrimiento de hechos falsos o en virtud de conductas antijurídicas que hayan influido, directa o indirectamente, en la sentencia, falseando su premisa de hecho; y, por otro lado, tenemos la revisión por la aparición de hechos nuevos con posterioridad a la emisión de la sentencia que alcanza la calidad de firme, esto es, por cualquier hecho o medio de prueba que demuestre la equivocación en que se incurrió al emitir la sentencia. En este último caso es evidente que debe tratarse de un hecho no considerado, por

desconocimiento, por el órgano jurisdiccional al momento de emitir la resolución que se somete a revisión.

Los motivos de revisión deben tener determinados caracteres especiales, a modo de restricción, para dar entrada al recurso. Así, en primer término, se sostiene que deben tener un carácter decisivo respecto de la sentencia; y, en segundo lugar, deben constituir una auténtica novedad con respecto al proceso anterior, es decir, debe tratarse de hechos nuevos y posteriores (o conocidos con posterioridad) a la sentencia bajo revisión (Vescovi, 1988, p. 343). No procede la acción de revisión si la pretensión del demandante se ampara en un supuesto no previsto legalmente; asimismo, no procede esta acción de impugnación cuando no se fundamenta sobre la base de hechos o pruebas nuevas, sino que se apoya en los mismos hechos y pruebas que el juzgador valoró al emitir su decisión cuya revisión se pretende¹¹.

Por lo expuesto, solo es posible acudir a esta vía de revisión por las causales previstas en el artículo 361° del Código de Procedimientos Penales y el artículo 439° del Código Procesal Penal de 2004. Estas serían desarrolladas, brevemente, a continuación.

¹¹ Véase, en esta línea, Exp. N.º 8321-2005-PHC/TC (f. j. 4), caso: García Javier.

a) **Supervivencia de la víctima en un homicidio** (art.361. 1 CdPP) se trata de un supuesto de evidente injusticia, ya que se condenó al imputado por un hecho delictivo inexistente (homicidio de una determinada persona), lo que queda demostrado con la aparición de la supuesta víctima o con el descubrimiento de que estuvo vivo luego de que se dictó la sentencia.

Este motivo de revisión tiene determinadas particularidades que conviene mencionar. Así, en primer lugar, se requiere que la condena haya sido por homicidio en grado de consumación; en segundo lugar, que la supuesta víctima se encuentre viva después de producido el hecho que causó la condena (no se exige que este viva al momento de presentar la revisión); y, en tercer lugar, debe ser ampliada para los demás delitos que tengan como consecuencial la muerte de la víctima (asesinato, por ejemplo), es decir, debe entenderse la expresión homicidio en sentido amplio y no restrictivo¹².

Esta causal también puede presentar algunos problemas que conviene plantear. Por ejemplo, un problema a resolver es si debe ponerse de manera automática en libertad al condenado favorecido por la revisión, o si es posible que se le pueda denunciar por el delito de homicidio en grado de tentativa o por cualquier otro delito contra

¹² En este sentido, entre otros, SAN MARTÍN CASTRO, Derecho procesal penal, p. II, p. 1036; DÍAZ MARTÍNEZ, en El nuevo proceso penal, p. 570.

la misma persona, pues el hecho de que la persona esté viva no significa, necesariamente, que el imputado no haya cometido otro hecho ilícito contra aquella.

Al respecto, existen dos alternativas de solución. Los que consideran que no es posible denunciarlo argumentan que al tratarse del mismo hecho, independientemente de la calificación jurídica que se le otorgue, se encuentra cubierto por el manto de la cosa juzgada; y, además, vendría a tallar el tema de la prescripción, aspecto que dependerá del momento en el que se resuelve la acción de revisión, pues si ha pasado poco tiempo desde que se emitió la condena firme, no habría prescrito la acción penal; por el contrario, si la revisión se produce luego de mucho tiempo, posiblemente ya habrá prescrito la acción penal. La otra alternativa es la que estima que, si es posible que se le inicie proceso por otro delito, ya que puede darse el caso de que no se trata del mismo hecho, de manera que no estaría protegido por la cosa juzgada; y en tanto que no haya transcurrido muchos años desde la comisión del hecho delictivo, tampoco operaría la prescripción.

b) **Condena mediante prueba falsa o carente de valor probatorio** (art.361.2 del CdPP y arti. 439.3 del CPP de 2004), esta causal se trata de la prueba de hechos que destruyen los elementos de convicción tenidos en consideración para emitir la sentencia condenatoria o que han concluido a una sentencia intencionalmente

injusta (Claría, 2009, p. 571). La razón de esta causal se halla en que resulta inaceptable, por producir una injusticia intolerable, que una condena basada en un fraude pueda subsistir.

Es preciso hacer la distinción entre el modo que se ha regulado esta causal en el Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal de 2004. El primero prescribe, en su artículo 361.2, que procederá la revisión “Cuando la sentencia se basó principalmente en la declaración de un testigo condenado después como falso en un juicio criminal”; mientras que el segundo, en su artículo 493.3, establece, con mayor amplitud, que procederá la revisión “Si se demuestra que un elemento de prueba, apreciado como decisivo en la sentencia, carece de valor probatorio que se le asignará por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación”.

Las diferencias saltan a la vista de la lectura de las mencionadas disposiciones, en tanto que el primer cuerpo normativo establece como causal de revisión únicamente a la declaración del testigo condenado en juicio criminal, sin hacer referencia a otros medios probatorios. Contrariamente, el Código Procesal Penal de 2004 no se restringe a la declaración falsa de un testigo, sino que lo amplía a todo elemento de prueba que carece de valor probatorio por ser invalido, adulterado o falsificado, siempre que haya sido decisivo para la emisión de la sentencia.

Otra diferencia consiste que el Código de Procedimientos Penales establece que la falsedad de la declaración del testigo debe ser determinada en una sentencia firme, motivo por el cual no procede la revisión cuando sea aún posible la interposición de un recurso, pues existe la posibilidad de que la sentencia sea revocada. El Código Procesal Penal de 2004, por el contrario, no establece como es que se debe demostrar que el elemento de prueba carece de valor probatorio; de ahí que pueda hacerse mediante una sentencia firme en la que se estableció que determinado elemento de prueba es falso o adulterado, o mediante un medio probatorio sobreviniente a la sentencia que, a nivel del procedimiento de revisión, demuestra fehacientemente que la condena se basó en un elemento probatorio adulterado.

c) **Contradicción entre sentencias** (art. 361.3 CdPP y arti. 439 CPP de 2004), esta causal requiere la existencia de dos sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada que llegan a una misma conclusión fáctica, pero resultan siendo inconciliables, debido a que se encuentra en conflicto con el principio lógico de razón suficiente, pues un hecho no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido (Jauchen, 2012, p. 683).

La inconciliabilidad o contradicción debe presentarse entre la sentencia cuya revisión se pide y otra sentencia irrevocable. No se requiere que este segundo fallo sea de condena, pero si debe ser

irrevocable. Lo último no debe ser entendido como una correlación en el tiempo, esto es, cuál de las dos sentencias debe emitirse primero, sino que debe ser comprendido como la imposibilidad de hacer que coexistan dos sentencias que tiene por fundamento la determinación de hechos inconciliables entre sí (Leone, 1963, p. 263).

Es menester precisar que la inconciliabilidad no debe producirse, necesariamente, en las partes dispositivas de los fallos, ya que esta situación, si bien es la máxima expresión de contraste entre los mismos, puede no presentarse en un caso; por lo que resulta suficiente que la contradicción se presente en la reconstrucción de los hechos sentados en ambas sentencias. En suma, inconciliabilidad o contradicción significa imposibilidad absoluta de coexistencia de las dos reconstrucciones de hecho¹³.

1.2.7.5. Finalidad del recurso de revisión

Refiere Peña Cabrera (2019) que:

El recurso de revisión tiene por finalidad la eliminación de errores judiciales que se derivan de ciertos hechos que se encuentran taxativamente establecidos en el código procesal penal, a fin de restablecer la paz jurídica que se quebranta al remover la cosa

¹³ LEONE, Tratado de Derecho procesal penal, vol. III, p. 264.

juzgada, lo cual únicamente puede obedecer a la estricta necesidad de corrección material, En cuanto la aplicación del derecho penal material y en estricta ventaja para el condenado, pues, no procede en su contra; sus efectos se manifiestan en dos direcciones: reivindicar una libertad y justamente afectada y recobrar la estimación personal frente a la sociedad, el honor que puede haber sido mellado en virtud de la condena penal; tanto así opera incluso post mortem (p. 937).

1.2.8.6. Importancia del recurso de revisión

La revisión como refiere Roxin & Schuneman (2019) sirve para salvar los errores de la justicia frente a sentencias firmes. Al explicar la cosa juzgada material se ha mostrado que la paz jurídica y de la justicia se encuentran en una relación equilibrada. El procedimiento de revisión es el caso más importante para una ruptura de la firmeza jurídica en interés de una decisión materialmente correcta. Su fundamento reside en que la firmeza jurídica debe retorcerse cuando hechos posteriormente descubiertos demuestran que la sentencia se presenta como manifiestamente falsa y colisiona en forma insoportable contra el sentimiento de justicia o como se ha demostrado, la condena no se fundamenta en una medida mínima en la justicia del procedimiento.

1.2.7.7. Jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el recurso de revisión

i. Fundamento del recurso de revisión de sentencia (Rev. Sent. N° 5-2016- Lima del 29/12/2016 F.J. 3 Sala Transitoria)

“Sexto: En principio, la sentencia firme tiene un efecto preclusivo que excluye toda posible continuación del proceso sobre el mismo objeto procesal. Sin embargo, la función de reconstruir la seguridad jurídica -confirmación de valores éticos sociales y de la confianza en las normas- que cumple la decisión definitiva, en algunos casos debe ceder en aras de valores superiores; por ello, se permite la revisión del procedimiento cerrado por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada mediante el recurso de revisión a favor del condenado, en supuestos excepcionales en los cuales, en verdad, el mantenimiento de la decisión no contribuiría a esos objetivos. En ese sentido, es preciso señalar la labor del tribunal de revisión no es determinar si existe o no alguna causa o motivo que invalide la sentencia sino sólo especialmente si, a la vista fundamentalmente de circunstancias que no han sido tenidas en cuenta por el juzgador, la sentencia debe rescindirse por ser esencialmente injusta; por lo que debía ni al caso realizar una revisión de los medios probatorios obrantes en autos a pesar de haberse dado la institución de la cosa juzgada”.

“Séptimo: En el presente caso, el recurrente invoca la causal prevista en el numeral 4 del artículo 439° del código procesal penal, por

tanto, es indispensable, en primer lugar, se trate de hechos o medios de prueba nuevos - fuente de información válida y consistente- esto es, el órgano juzgador no junto con ellas en su oportunidad para decidir; y, en segundo lugar, que tengan un contenido de información, razonable y suficiente, que por sí solo o en relación con los demás recaudos de la causa objeto de revisión permita concluir que la condena quesito no se condice con el valor justicia, con lo que realmente aconteció”.

ii. La prueba nueva será admitida mientras tenga la capacidad de generar duda razonable sobre el error judicial (Rev. Sent. N° 31-2014-Apurímar del 20/03/2014 F.J. 2 y 3 Sala Penal Transitoria)

“Segundo: La demanda de revisión, dada la finalidad específica que ostenta, cuál es la rescisión de sentencias firmes de condenas formal y materialmente válidas y por constituir una excepción a la inmutabilidad de las sentencias y el principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada, sólo procede ante la acreditación de una causa taxativamente prevista en la ley.

Tercero: Los argumentos esgrimidos por el recurrente están dirigidos a cuestionar la decisión optado por el citado órgano jurisdiccional, que no aportan prueba nueva alguna, pues del

análisis preliminar efectuado a la prueba ofrecida por el recurrente como es el certificado médico legal que se le practicará, en la que se concluye lesiones traumáticas recientes ocasionadas por agente contundente; que si bien no ha sido objeto de valoración en el proceso principal no cuentan con el principio de utilidad propio de todo medio probatorio, incumpliendo la formalidad de los medios probatorios, ya que no basta con determinar su calidad de prueba nueva sino que es necesaria la concurrencia de la capacidad de generar los duda razonable del error judicial capaces de establecer la inocencia del condenado; objeciones que no constituyen materia de análisis vía revisión de Sentencia, Pues están orientadas a conseguir luego de la culminación del proceso, un reexamen de los hechos, pruebas actuadas y un nuevo fallo que enerve su responsabilidad penal”.

iii. Sentencias inconciliables como motivo de revisión de sentencia
(Rev. Sent. N° 4-2014 – Lima del 18/03/2015 F.J. 3, 11 Y 13 Sala Penal Transitoria – Caso Antauro Humala)

“Tercero: la prueba que permite el contraste es en este caso otra sentencia penal firme condenatoria o absolutoria por el mismo delito o mejor dicho hecho procesal o suceso histórico objeto de imputación y condena o absolución dictada con posterioridad. El contraste entre ambas decisiones importa la imposibilidad de hacer que coexisten dos sentencias penales que tienen por fundamento esencial de la declaración de culpabilidad la determinación de hechos

inconciliables entre sí lo que afecta son las reconstrucciones de hecho de suerte que uno no puede estar en presencia de la otra este último deriva el principio de trascendencia. Se trata pues del juicio histórico de las sentencias en pugna no del juicio jurídico. Por lo demás en los casos de pluralidad de personas en el mismo suceso histórico es posible según su nivel de intervención y del diferencial análisis de la imputación objetiva y subjetiva atinente a cada uno de ellos es posible niveles distintos de subfunción típica. Lo que importa es comparar las reconstrucciones de los hechos en ambas sentencias y de su contraste fluya que son contradictorias mutuamente y que no es viable armonizarlas. No es posible la revisión cuando la contradicción sólo está en la diversa interpretación de la ley ya que no se admite la revisión por motivos de derecho”.

1.3. Hipótesis

La hipótesis queda planteada de la siguiente forma:

SI una sentencia absolutoria firme, es obtenida dentro un proceso penal basado en prueba falsa o con violación de funciones por parte del juez que emitió el fallo ENTONCES debe proceder la acción de revisión, como una excepción al principio constitucional de cosa juzgada.

1.4. Variables

- **Variable 1:** “SI una sentencia absolutoria firme, es obtenida dentro un proceso penal basado en prueba falsa o con violación de funciones por parte del juez que emitió el fallo.”
- **Variable 2:** “ENTONCES debe proceder la acción de revisión, como una excepción al principio constitucional de cosa juzgada.”

CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES

2.1. Tipo de Investigación:

2.1.1. De acuerdo al fin que persigue.

Aplicada, puesto se pretende analizar el recurso de revisión también para supuestos en donde se ha emitido un fallo absolutorio debido a la utilización de prueba falsa, valorada durante el juicio y que determinó la absolución de una persona o se ha obtenido dicha absolución a consecuencia de un acto en violación de las funciones por parte del magistrado (juez penal de la Corte Suprema, Sala Superior, o Juzgado Penal, en donde haya quedado consentida la sentencia), supuesto que ha sido acogido tanto por la Corte IDH en el caso Óscar Alberto Mohamed vs. Argentina, como en otras legislaciones, como el caso de Colombia.

2.1.2. De acuerdo al diseño de investigación.

Descriptiva, pues se pretende analizar el tratamiento doctrinario y jurisprudencial del recurso de revisión, figura procesal penal que no ha sido muy desarrollada en nuestro país y que solo opera para el caso de sentencias condenatorias, delimitando también criterios que se vinculan a este recurso o acción, tal como la cosa juzgada, la seguridad jurídica y los derechos de los agraviados, teniendo en cuenta que el recurso de revisión, constituye una excepción a la cosa juzgada.

2.2. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

- **Método Dialéctico:** Se analizará una situación extraída de la realidad, ya que la corrupción judicial develada por los audios el año 2018, constituye un

destape que ha puesto en evidencia la crisis actual de la administración de justicia y que permite reflexionar sobre la posibilidad casi concreta que muchas de las sentencias absolutorias han sido obtenidas ilícitamente en contubernio con los magistrados que conocieron el caso.

2.3. Diseño de Contrastación

La unidad de análisis es de tipo documental, lo que significa que, se ha procedido al análisis de la doctrina y jurisprudencia.

2.4. Población y muestra

La población está formada por el total de jueces y fiscales especializados en derecho penal del Distrito Judicial de Lambayeque.

La muestra consistirá en diez preguntas realizadas a diez jueces y diez fiscales penales quienes serán interrogados respecto a la positivización del supuesto antes mencionado y pueda emitirse un resultado que abone o no admita la propuesta pretendida.

2.5. Técnicas, Instrumentos y Materiales de Recolección de Datos

- **Documental:** fichas textuales y de resumen
- **Observación:** protocolo o guía de observación de campo
- **Encuestas:** Se utiliza como instrumento un cuestionario que ayuda a recoger información sobre las variables expuestas.

CAPÍTULO III: RESULTADOS

1. Descripción del trabajo de campo

Como instrumentos para la contrastación de la presente investigación se ha recurrido a la técnica de la encuesta, para lo cual del total de la población de operadores jurídicos, conformados por jueces y fiscales especializados en la rama penal-constitucional del Distrito Judicial de Lambayeque se ha procedido a recoger una muestra no representativa de encuestas realizadas a 15 jueces y 15 fiscales penales, en donde se le formularon preguntas relativas al recurso de revisión en caso de sentencias absolutorias, como excepción al Principio de Cosa Juzgada, tal como se evidencia en los siguientes cuadros gráficos.

2. Presentación de gráficos de los datos obtenidos de las encuestas realizadas en la presente investigación.

1. ¿Considera usted que la cosa juzgada, consagrado en el artículo 139, inciso 13 de la Constitución Política del Perú, significa que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla, siendo esto último lo que denominamos la inmutabilidad de la cosa juzgada?

30 respuestas

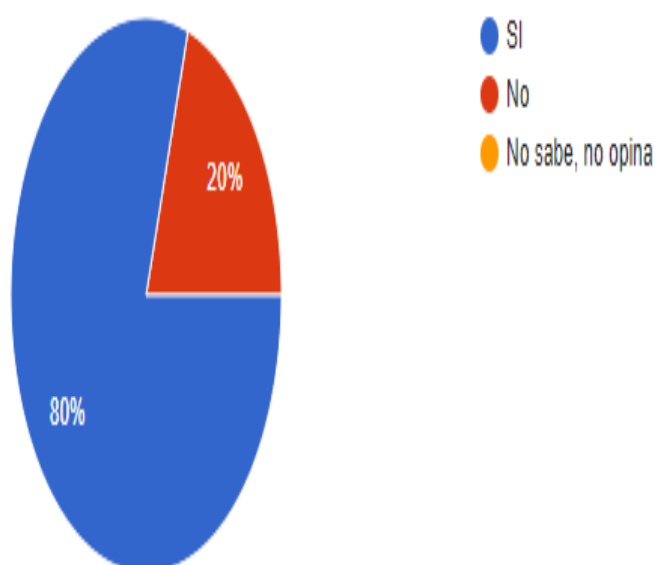


gráfico 1

2. ¿Tiene conocimiento respecto al recurso de revisión, contemplado en el artículo 369 del Código Procesal Penal, que regula una serie de causales taxativamente expresados en el texto normativo y que están orientados a criterios de justicia, cuando se desvirtúa la responsabilidad de una persona condenada?

30 respuestas

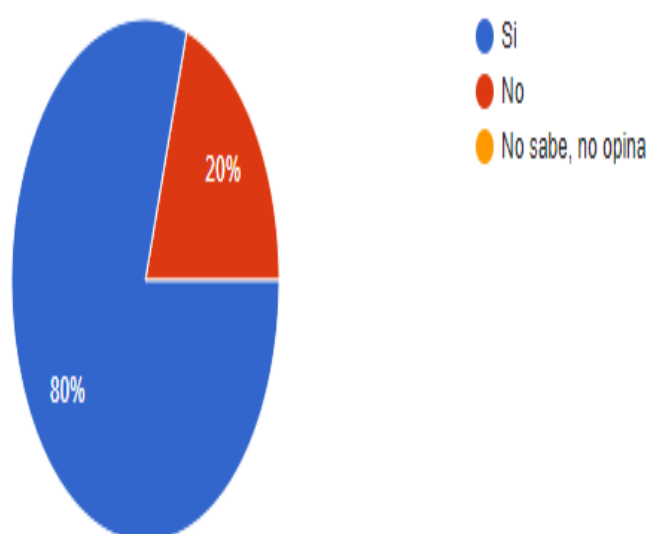


gráfico 2

3. ¿Considera usted que el recurso de revisión es un procedimiento extraordinario de impugnación de marcado carácter excepcional al principio constitucional de Cosa Juzgada?

30 respuestas

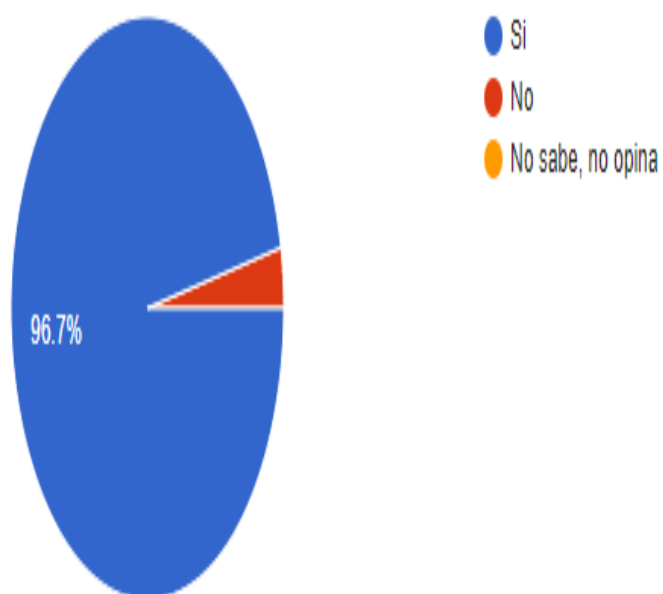


gráfico 3

4. ¿Tiene conocimiento de cuáles son las causales establecidas en el artículo 369° del Código Procesal Penal, el cual señala que procede la revisión de las sentencias condenatorias firmes procede, sin limitación temporal y sólo a favor del condenado?

30 respuestas

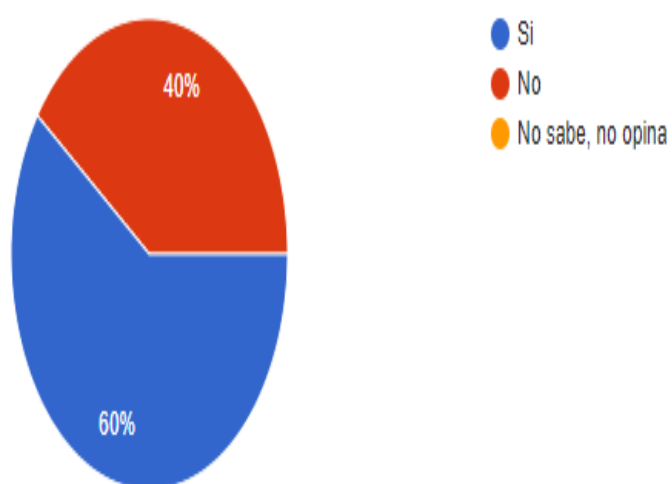


gráfico 4

5. ¿Tiene conocimiento que el recurso de revisión solo es aplicable para la revisión de sentencias condenatorias injustas, dejando de lado el hecho que pueden también emitirse fallos absolutorios injustos?

30 respuestas

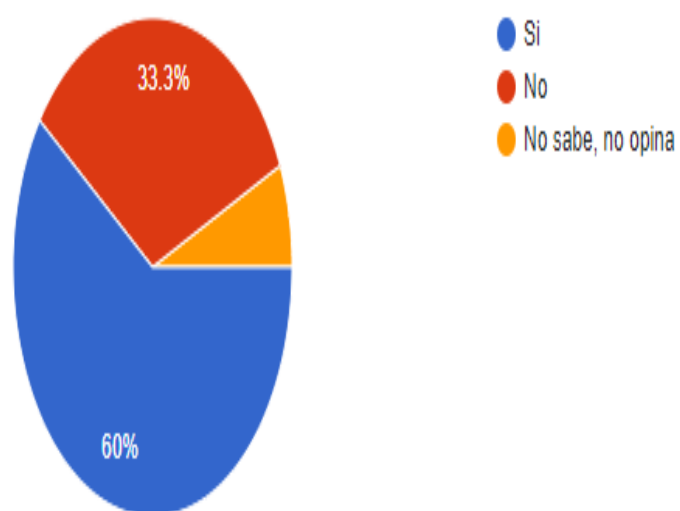


gráfico 5

6. ¿Tiene conocimiento si existe alguna forma de revisar una sentencia absolutoria con calidad de cosa juzgada derivada de un acto de corrupción por parte el magistrado que conoció el caso o ante supuestos de prueba falsa?

30 respuestas

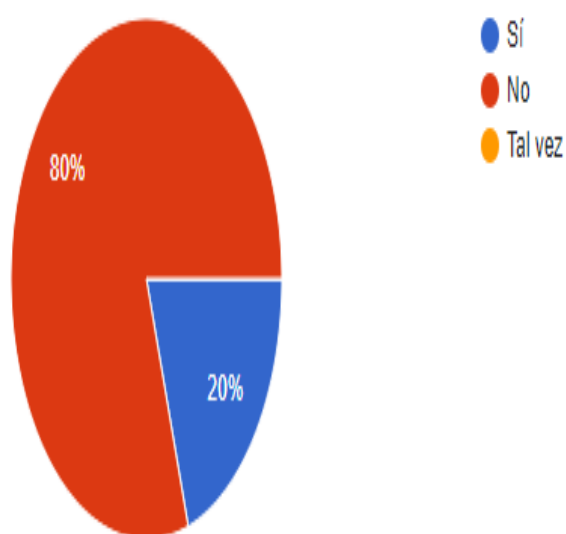


gráfico 6

7. ¿Tiene conocimiento si en otros países se cuenta a la fecha con un mecanismo procesal penal que pueda aplicar para revisar sentencias absolutorias obtenidas injustamente y que además de ello dicha facultad le corresponda a los agraviados, inconformes ante la respuesta negativa de la justicia de resolver un conflicto del cual son los perjudicados con las consecuencias del delito?

30 respuestas

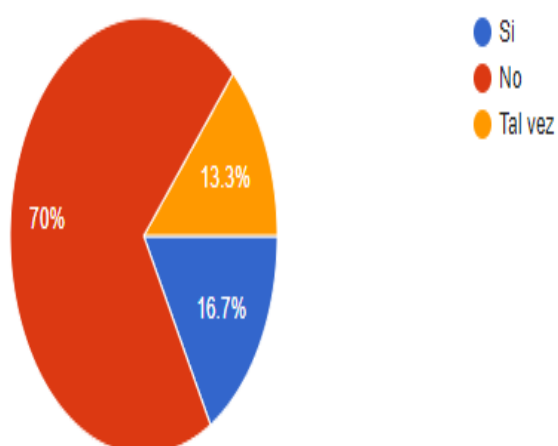


gráfico 7

8. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de su Doctrina Jurisprudencial señala a través del caso Almonacid Arellano y otros vs Chile en cuya sentencia de fondo del 26 de setiembre de 2006 en la segunda parte del párrafo 154 refiere que “si es un caso en concreto aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, ya que, se dice, las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas así como la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del non bis in idem. ¿Considera usted que el Estado Peruano, a la luz de la jurisprudencia expuesta que forma parte del Derecho Internacional, al cual estamos adscritos, debe adoptar medidas legislativas para cumplir con los estándares internacionales?



30 respuestas

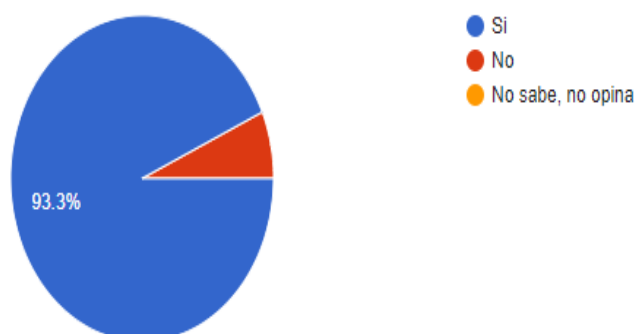


gráfico 8

9. ¿Considera usted que no solo debería ser procedente la revisión para el caso sentencias condenatorias, sino que también debería extenderse a sentencias absolutorias ya que, al ser la acción de revisión un medio válido para superar la cosa juzgada, pues, el derecho no puede legitimar bajo el pretexto de seguridad jurídica absoluciones logrados mediante actos de falsedad o fraude en la presentación y sustanciación del acervo probatorio o a consecuencia de la violación de las funciones del magistrado -tráfico de influencias, cohecho e inclusive prevaricato .que conllevan a una decisión injusta o ilegal, al evadir definitivamente la acción del ius puniendi del Estado a una persona responsable de la comisión de un delito?

30 respuestas

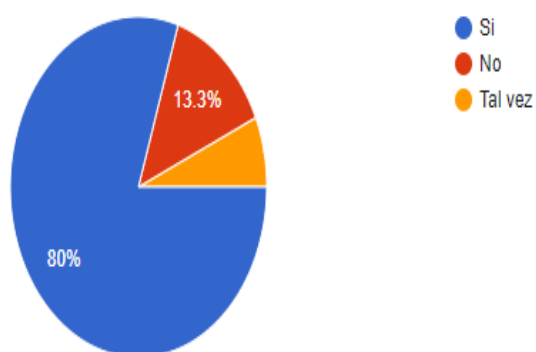


gráfico 9

10. ¿Cree usted que debe procederse a una modificación legislativa de la normativa relativa a la acción de revisión, a fin que resulte aplicable también a los casos de fallos absolutorios injustos?

30 respuestas

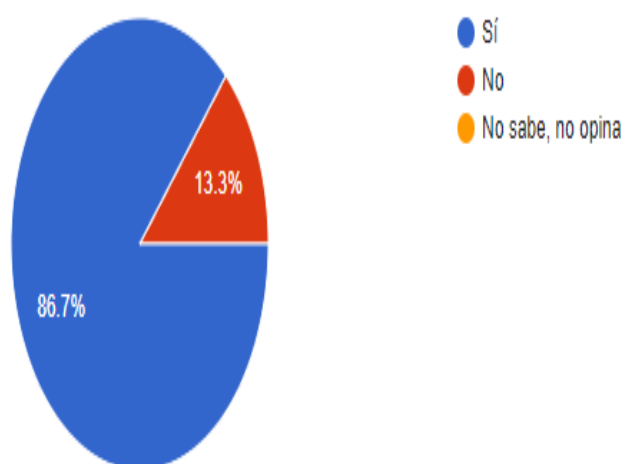


gráfico 10

3. Análisis de los resultados obtenidos de las muestras representadas en gráficos

3.1. Respecto a la pregunta número 1: ¿Considera usted que la cosa juzgada, consagrado en el artículo 139°, inciso 13 de la Constitución Política del Perú, significa que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla, siendo esto último lo que denominamos la inmutabilidad de la cosa juzgada?

80% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **sí**.

20% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **no**.

0% de encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que no sabe, no opina (forma dubitativa).

3.2. Respecto a la pregunta número 2: ¿Tiene conocimiento respecto al recurso de revisión, contemplado en el artículo 369 del Código Penal¹⁴, que regula una serie de causales taxativamente expresados en el texto normativo y que están orientados a criterios de justicia, cuando se desvirtúa la responsabilidad de una persona condenada?

80% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **sí**.

20% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **no**.

0% de encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que no sabe, no opina (forma

¹⁴ Se refiere al artículo 439° del Código Procesal Penal.

dubitativa).

3.3. Respecto a la pregunta número 3: ¿Considera usted que el recurso de revisión es un procedimiento extraordinario de impugnación de marcado carácter excepcional al principio constitucional de Cosa Juzgada?

96,7% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **sí**.

3,3% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **no**.

0% de encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que no sabe, no opina (forma dubitativa).

3.4. Respecto a la pregunta número 4: ¿Tiene conocimiento de cuáles son las causales establecidas en el artículo 369° del Código Procesal Penal¹⁵, el cual señala que procede la revisión de las sentencias condenatorias firmes procede, sin limitación temporal y sólo a favor del condenado?

60% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **sí**.

40% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **no**.

0% de encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que no sabe, no opina (forma dubitativa).

3.5. Respecto a la pregunta número 5: ¿Tiene conocimiento que el recurso de revisión

¹⁵ Corresponde al artículo 439° del Código Procesal Penal.

solo es aplicable para la revisión de sentencias condenatorias injustas, dejando de lado el hecho que pueden también emitirse fallos absolutorios injustos?

60% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **sí**.

33.3% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **no**.

6.7% de encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que no sabe, no opina (forma dubitativa).

3.6. Respecto a la pregunta número 6: ¿Tiene conocimiento si existe alguna forma de revisar una sentencia absolutoria con calidad de cosa juzgada derivada de un acto de corrupción por parte el magistrado que conoció el caso o ante supuestos de prueba falsa?

80% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **sí**.

20% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **no**.

0% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **tal vez** (forma dubitativa).

3.7. Respecto a la pregunta número 7: ¿Tiene conocimiento si en otros países se cuenta a la fecha con un mecanismo procesal penal que pueda aplicar para revisar sentencias absolutorias obtenidas injustamente y que además de ello dicha facultad le corresponda a los agraviados, inconformes ante la respuesta negativa de la justicia de resolver un conflicto del cual son los perjudicados con las consecuencias del delito?

16.7% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **sí**.

70% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **no**.

13.3% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **tal vez** (forma dubitativa).

3.8. Respecto a la pregunta número 8: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de su Doctrina Jurisprudencial señala a través del caso Almonacid Arellano y otros vs Chile en cuya sentencia de fondo del 26 de setiembre de 2006 en la segunda parte del párrafo 154 refiere que *“si es un caso en concreto aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, ya que, se dice, las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas así como la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del non bis in idem.* ¿Considera usted que el Estado Peruano, a la luz de la jurisprudencia expuesta que forma parte del Derecho Internacional, al cual estamos adscritos, debe adoptar medidas legislativas para cumplir con los estándares internacionales?

93.3% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **sí**.

6.7% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **no**.

0% de encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que no sabe, no opina (forma dubitativa).

3.9. Respecto a la pregunta número 9: ¿Considera usted que no solo debería ser procedente la revisión para el caso sentencias condenatorias, sino que también debería extenderse a sentencias absolutorias ya que, al ser la acción de revisión un medio válido

para superar la cosa juzgada, pues, el derecho no puede legitimar bajo el pretexto de seguridad jurídica absoluciones logrados mediante actos de falsedad o fraude en la presentación y sustanciación del acervo probatorio o a consecuencia de la violación de las funciones del magistrado -tráfico de influencias, cohecho e inclusive prevaricato .que conllevan a una decisión injusta o ilegal, al evadir definitivamente la acción del *ius puniendi* del Estado a una persona responsable de la comisión de un delito?

80% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **sí**.

13.3% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **no**.

6.7% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **tal vez**.

3.10. Respecto a la pregunta número 10: ¿Cree usted que debe procederse a una modificación legislativa de la normativa relativa a la acción de revisión, a fin que resulte aplicable también a los casos de fallos absolutorios injustos?

86.7% de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **sí**.

13.3 % de los encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que **no**.

0% de encuestados (jueces y fiscales penales) respondieron que no sabe, no opina (forma dubitativa).

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN

1. Discusión de los Resultados

Luego de haber presentado y analizado los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a operadores jurídicos (jueces y fiscales especializados en el área penal) respecto a las medidas de protección otorgadas a los colaboradores eficaces podemos verificar que:

1. La mayoría de los encuestados (80%) considera que la cosa juzgada, consagrado en el artículo 139°, inciso 13 de la Constitución Política del Perú, significa que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla, siendo esto último lo que denominamos la inmutabilidad de la cosa juzgada, y solo un 20% respondió negativamente.
2. La mayoría de los encuestados (80%) señala que tiene conocimiento respecto al recurso de revisión, contemplado en el artículo 439° del Código Penal, que regula una serie de causales taxativamente expresados en el texto normativo y que están orientados a criterios de justicia, cuando se desvirtúa la responsabilidad de una persona condenada, mientras que solo un 20% respondió negativamente.
3. La mayoría de los encuestados (96,7%) respondieron que el recurso de revisión es un procedimiento extraordinario de impugnación de marcado carácter excepcional al principio constitucional de Cosa Juzgada, mientras que solo un 3.3 % respondió negativamente.
4. La mayoría de encuestados (60%) respondieron que tienen conocimiento de cuáles son las causales establecidas en el artículo 439° del Código Procesal Penal, el cual señala que procede la revisión de las sentencias condenatorias firmes procede, sin limitación

temporal y sólo a favor del condenado, mientras que el 40% respondió negativamente.

5. Un porcentaje mayoritario de los encuestados (60%) respondió que tiene conocimiento que el recurso de revisión solo es aplicable para la revisión de sentencias condenatorias injustas, dejando de lado el hecho que pueden también emitirse fallos absolutorios injustos, mientras que el 33.3% de los encuestado refirió negativamente y un 6.7% de los encuestados respondieron en forma dubitativa a la pregunta realizada.

6. La mayoría de encuestados (80%) respondió que tiene conocimiento si existe alguna forma de revisar una sentencia absolutoria con calidad de cosa juzgada derivada de un acto de corrupción por parte el magistrado que conoció el caso o ante supuestos de prueba falsa y un 20% respondió negativamente.

7. La minoría de encuestados (16.7%) tiene conocimiento si en otros países se cuenta a la fecha con un mecanismo procesal penal que pueda aplicar para revisar sentencias absolutorias obtenidas injustamente y que además de ello dicha facultad le corresponda a los agraviados, inconformes ante la respuesta negativa de la justicia de resolver un conflicto del cual son los perjudicados con las consecuencias del delito, mientras que un porcentaje mayoritario (70%) respondió no tener conocimiento y un 13.3% opinó en forma dubitativa.

8. La mayoría de encuestados (93.3%) considera que el Estado Peruano, a la luz de la jurisprudencia expuesta que forma parte del Derecho Internacional, al cual estamos adscritos, debe adoptar medidas legislativas para cumplir con los estándares internacionales, mientras que un 6.7% respondió negativamente.

9. La mayoría de encuestados (80%), considera que no solo debería ser procedente la revisión para el caso sentencias condenatorias, sino que también debería extenderse a

sentencias absolutorias ya que, al ser la acción de revisión un medio válido para superar la cosa juzgada, pues, el derecho no puede legitimar bajo el pretexto de seguridad jurídica absoluciones logrados mediante actos de falsedad o fraude en la presentación y sustanciación del acervo probatorio o a consecuencia de la violación de las funciones del magistrado -tráfico de influencias, cohecho e inclusive prevaricato .que conllevan a una decisión injusta o ilegal, al evadir definitivamente la acción del *ius puniendi* del Estado a una persona responsable de la comisión de un delito, mientras que un 13.3% considera que no es necesario y un 6.7% respondió dubitativamente.

10. La mayoría de encuestados (86,7%) considera que debe procederse a una modificación legislativa de la normativa relativa a la acción de revisión, a fin que resulte aplicable también a los casos de fallos absolutorios injustos, mientras que un 13.3% no lo considera necesario.

Por tanto, de la discusión y contrastación de los resultados obtenidos de las encuestas dirigidas a los operadores jurídicos (jueces y fiscales) del Distrito Judicial de La Libertad se valida nuestra hipótesis respecto a que si una sentencia absolutoria firme, es obtenida dentro un proceso penal basado en prueba falsa o con violación de funciones por parte del juez que emitió el fallo entonces debe proceder la acción de revisión, como una excepción al principio constitucional de cosa juzgada.

2. Propuesta de la presente investigación

La propuesta de la presente investigación consiste en una modificación legislativa del artículo 439° del Código Procesal Penal, a fin de que se regule también la revisión de

sentencias absolutorias, como lo ha recomendado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia analizada líneas arriba, ello de cara a que somos un país adscrito a la Convención Americana de Derechos Humanos, de conformidad con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú *“las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”* así como el artículo V del título preliminar del Código Procesal Constitucional que refiere que *El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.*

Dicha propuesta de *lege ferenda* se consignará en los anexos adjuntos a la presente investigación.

CONCLUSIONES

- Debe proceder una acción de revisión de una sentencia absolutoria firme, en la medida que sea es obtenida dentro un proceso penal basado en prueba falsa o con violación de funciones por parte del juez que emitió el fallo.
- La cosa juzgada es un principio constitucional que implica que una resolución firme y ejecutoriada que ha puesto fin a un proceso judicial es inmutable ya que no puede ser materia de impugnación, sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla, lo que de paso implica que el contenido de fondo de las mismas no puede modificarse o ser dejado sin efecto, sea por actos de poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó; sin embargo, como todo derecho fundamental no es absoluto, sino que tiene excepciones, como lo es el recurso de revisión dentro del proceso penal, el cual puede invocarse extraordinariamente frente a determinados supuestos tasados.
- El recurso de revisión en materia procesa penal solo opera para el caso de sentencias condenatorias, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha recomendado y exhortado a los Estados miembros que se proceda a la regulación del recurso de revisión en sentencias absolutorias, ya que también puede haber sido producto de un acto de falsedad, corrupción u otro tipo de injusticia o acción arbitraria.

- Los supuestos que son susceptibles de ser revisados mediante la acción de revisión cuando se hallan emitido sentencias absolutorias y tengan la calidad de cosa juzgada son cuando se basen en prueba falsa o con violación de funciones por parte del juez que emitió el fallo, esto último ligado sobre todo a actos de corrupción para obtener una sentencia penal a favor del imputado.
- Se ha propuesto, una modificación legislativa de *lege ferenda* de la normativa relativa a la acción de revisión, a fin que resulte aplicable también a los casos de fallos absolutorios injustos.

RECOMENDACIONES

- Debe procederse a la regulación del recurso de revisión para el caso de sentencias absolutorias firmes, puesto que, de lo extraído de la realidad nacional, puede verificarse que actos de falsedad o de corrupción por parte de los órganos jurisdiccionales pueden dar lugar a la emisión de sentencias absolutorias injustas contrarias a la búsqueda de la verdad como uno de los fines del proceso penal.
- Debe tomarse en cuenta las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a que debe operar el recurso extraordinario de revisión para el caso de sentencias absolutorias firmes, incluso en la legislación comparada ya se admitió dicho supuesto, como es el caso de Colombia, por tanto nuestro país al estar adscrito a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, debe adecuar la legislación a los estándares internacionales brindados tanto por la referida convención, como por la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Blasco, M. (1994). Reflexiones en torno a la fuerza de cosa juzgada en la sentencia dictada en cuestión de inconstitucionalidad . En *Revista española de derecho constitucional* Año 14. N. 41 (pág. 41). Madrid.
- Cáceres, R. (2011). *Los Medios Impugnatorios en el Proceso Penal*. Lima: Jurista Editores.
- Cáceres, R., & Iparraguirre, R. (2021). *Código Procesal Penal Comentado*. Lima : Jurista Editores.
- Calderón, M. (2005). *La Segunda Instancia Penal*. Navarra: Thompson Aranzadi.
- Castañeda, S. (2006). “Cosa Juzgada” . En *La Constitución Comentada. Tomo II Primera reimpresión* (pág. 568). Lima: Gaceta Jurídica.
- Cubas, V. (2015). *Nuevo Proceso Penal. Teoría y Práctica de su implementación. 2da Edición. , 215. P. 602*. Lima: Palestra Editores.
- De la Oliva, A., Aragonese, S., Hinojosa, R., Muerza, J., & Tome, J. (2007). *Derecho Procesal Penal. 8va Edición*. Madrid: Edit. Universitaria.
- Jauchen, E. (2012). *Tratado de Derecho procesal penal t. III*. Santa Fé: Rubinzal Culzoni.
- Leone, G. (1963). *Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo III*. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa América.
- Maier, J. (2003). *Derecho Procesal Penal. Fundamentos. T.I*. Buenos Aires: Editores del Puerto.

- Oré, A. (2016). *Derecho Procesal Penal Peruano*. Lima: Gaceta Jurídica.
- Peña Cabrera, A. (2011). *Medios Impugnatorios. Problemas de Aplicación del Código Procesal Penal de 2004*. Lima: Gaceta Jurídica.
- Peña Cabrera, A. (2019). *Manual de Derecho Procesal Penal. Quinta Edición*. Lima: Idemsa.
- Roxin, C., & Schuneman, B. (2019). *Derecho Procesal Penal*. Argentina: Ediciones Didot.
- Rubianes, C. (1985). *Manual de Derecho Procesal Penal. El Procedimiento Penal Tomo III*. Buenos Aires: Edit. De Palma.
- San Martín, C. (2009). Recurso de Apelación y de Casación Penal. En *En Teoría de la Impugnación*. Lima: Palestra Editores.
- Vasquez, J. (1997). *Derecho Procesal Penal Tomo II*. Buenos Aires – Argentina: Rubinzal Culzoni Editores.
- Vescovi, E. (1988). *Los recursos judiciales y demás medios impugnatorios en Iberoamérica*. Argentina: De Palma.

ANEXOS

Proyecto de Ley N°

Ley que modifica el artículo 439° del Código
Procesal Penal y adiciona texto normativo,
para que el recurso de revisión opere también
en el caso de sentencias absolutorias firmes.

.....con DNI que suscribe, en representación de, en ejercicio del
derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 2, inciso 17; 37 y 107 de la
Constitución Política del Estado y conforme lo establecen los artículos 74 y 75 y 76, inciso
3 del Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Congreso de la Republica ha dado la ley siguiente:

<p>LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 439° DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y ADICIONA TEXTO NORMATIVO PARA QUE EL RECURSO DE REVISIÓN OPERE TAMBIÉN EN EL CASO DE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS FIRMES</p>

ARTÍCULO 1° Modificación del artículo 439° del Código Procesal Penal. –

Modifícase el artículo 439° del Código Procesal Penal, quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 439 del Código Procesal Penal:

La revisión de las sentencias condenatorias firmes procede, sin limitación temporal y sólo a favor del condenado, en los siguientes casos:

- 1. Cuando después de una sentencia se dictara otra que impone pena o medida de seguridad por el mismo delito a persona distinta de quien fue primero sancionada, y no pudiendo conciliarse ambas sentencias, resulte de su contradicción la prueba de la inocencia de alguno de los condenados.*
- 2. Cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la calidad de cosa juzgada.*
- 3. Si se demuestra que un elemento de prueba, apreciado como decisivo en la sentencia, carece de valor probatorio que se le asignara por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación.*
- 4. Si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba, no conocidos durante el proceso, que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado.*

5. Cuando se demuestre, mediante decisión firme, que la sentencia fue determinada exclusivamente por un delito cometido por el Juez o grave amenaza contra su persona o familiares, siempre que en los hechos no haya intervenido el condenado.

6. Cuando la norma que sustentó la sentencia hubiera sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en un caso concreto por la Corte Suprema.

En los causales de los incisos 3, 4 y 5 procede la revisión las sentencias absolutorias firmes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Artículo 1 .- Derogación de normas opuestas a la ley

Quedan derogadas y sin efecto las normas legales y administrativas que se opongan o limiten la aplicación a la presente ley.

Artículo 2 .- Vigencia de la Ley

La presente ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario “El Peruano”.

Lima,de 2021.

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El presente proyecto tiene como objetivo modificar el artículo 439° del Código Procesal Penal y adicionar texto normativo para que el recurso de revisión opere también en el caso de sentencias absolutorias.
2. El recurso de revisión es un procedimiento extraordinario de impugnación de marcado carácter excepcional al principio constitucional de Cosa Juzgada, destinado a rescindir sentencias firmes de condena, previsto en supuestos legalmente tasados en que se ponga en evidencia a posteriori su injusticia, esto es, su finalidad está encaminada a que, sobre la sentencia firme, prevalezca la auténtica verdad y, con ella, la justicia material sobre la formal.
3. La acción de revisión constituye, en nuestro ordenamiento jurídico, una acción autónoma de impugnación de sentencias condenatorias firmes e injustas, en la medida de que son emitidas sobre la base de errores judiciales manifiestos; en otros términos, la acción de revisión está dirigida a rescindir, por causales taxativamente previstas por la ley, las injusticias causadas con motivo de la emisión de una sentencia condenatoria firme.
4. En términos generales se sostiene que la revisión es una vía en donde lo que se va a llevar a cabo es la reevaluación respecto a la inocencia de una persona condenada mediante una sentencia cuya decisión es cuestionada por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 439° del Código Procesal Penal, el cual señala que procede la revisión de las sentencias condenatorias firmes procede, sin limitación temporal y sólo a favor del condenado, en los siguientes casos:

- i. Cuando después de una sentencia se dictará otra que impone pena o medida de seguridad por el mismo delito a persona distinta de quien fue primero sancionada, y no pudiendo conciliarse ambas sentencias, resulte de su contradicción la prueba de la inocencia de alguno de los condenados.
 - ii. Cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la calidad de cosa juzgada.
 - iii. Si se demuestra que un elemento de prueba, apreciado como decisivo en la sentencia, carece de valor probatorio que se le asignara por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación.
 - iv. Si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba, no conocidos durante el proceso, que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado.
 - v. Cuando se demuestre, mediante decisión firme, que la sentencia fue determinada exclusivamente por un delito cometido por el Juez o grave amenaza contra su persona o familiares, siempre que en los hechos no haya intervenido el condenado.
 - vi. Cuando la norma que sustentó la sentencia hubiera sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en un caso concreto por la Corte Suprema.
5. Como puede verse, todas las causales han sido diseñadas para ser aplicados a casos de sentencias condenatorias, existiendo un vacío normativo respecto a la existencia

de sentencias absolutorias obtenidas injustamente, como podría ser mediante actos de violación de funciones por parte del juez o basados en pruebas falsas, pues si el recurso de revisión es considerado una excepción al principio constitucional la cosa juzgada, nada obsta a que lo sea también para el caso de sentencias absolutorias, ello claro está bajos parámetros estrictos y taxativos que no permitan una generalización y se filtren solo los casos que encajen en las causales a establecer y que serán el aporte de la presente investigación, debiendo tener en cuenta además que el legitimado para interponer dicha acción sería el afectado con el delito, agraviado o actor civil

6. A mayor abundamiento, tenemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de su Doctrina Jurisprudencial señala a través del caso *Almonacid Arellano y otros vs Chile* en cuya sentencia de fondo del 26 de setiembre de 2006 en la segunda parte del párrafo 154 refiere que *“si es un caso en concreto aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, ya que, se dice, las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas así como la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del non bis in ídem.*

7. Asimismo, a nivel de legislación comparada, es importante precisar que ya el Código de Procedimiento Penal Colombiano ha abordado el tema así en su artículo 192° inciso 5 y 6 señala que es procedente la acción de revisión contra sentencias ejecutoriadas:

***Inciso 5.-** Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero.*

***Inciso 6.-** Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus conclusiones.*

En ese sentido señala que dicho numerales se aplicaran también en los casos de preclusión y sentencia absolutoria.

8. Es en base a esas fuentes de derecho que elaboraremos nuestra propuesta legislativa, a efectos de aportar a la comunidad jurídica y a la resolución de conflictos que en efecto son parte de la realidad en la que nos encontramos actualmente, siendo que la revisión de sentencias absolutorias también debe constituir una excepción válida del Principio Constitucional de Cosa Juzgada

II. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Lo propuesta legislativa no alterará el marco constitucional ni la legislación vigente, sin embargo, lo que se prosigue con esta iniciativa legislativa es modificar el artículo 439° del Código Procesal Penal y adicionar texto normativo para que resulte procedente el recurso de revisión en sentencias absolutorias firmes.

III. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

El proyecto de ley propuesto no irroga gasto al erario nacional, pues no existe inversión que se tenga que hacer que genere gastos al fisco, pues es aplicable a las relaciones de

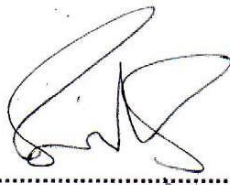
derecho público lo que permite que exista una regulación frente a la existencia de casos en donde las sentencias absolutorias firmes han sido logradas mediante actos de falsedad o por incumplimiento de deberes por parte del juez, quien pudo haber incurrido en algún delito contra la Administración Pública.

CONSTANCIA DE APROBACION DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, **Freddy Hernández Rengifo**, asesor de tesis, revisor del trabajo de investigación del tesista **ALEX IVAN TONGO NAVARRO** titulada: **LA REVISIÓN DE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS FIRMES DERIVADAS DE UN PROCESO PENAL BASADO EN PRUEBA FALSA O CON VIOLACIÓN DE FUNCIONES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA**. Luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de **15 %** verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte de acuerdo a la Directiva para la Evaluación de Originalidad de los documentos académicos, de investigación formativa y para la obtención de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Guías de uso del Software de reporte de similitud TURNITIN, aprobado mediante Resolución N° 659-2020-R, de fecha 8 de setiembre de 2020, razón por la cual la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 15 de junio del 2021.



.....
Freddy Hernández Rengifo

Asesor



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Alex Ivan Tongo Navarro
Assignment title: Tesis Posgrado
Submission title: LA REVISIÓN DE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS FIRMES DERIVA...
File name: JURISDICCIONAL,_COMO_EXCEPCION_AL_PRINCIPIO_DE_COSA...
File size: 966.32K
Page count: 82
Word count: 12,837
Character count: 73,637
Submission date: 15-Jun-2021 05:53PM (UTC-0500)
Submission ID: 1607150113



Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
ESCUELA DE POSGRADO



MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN
CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

TESIS:

"LA REVISIÓN DE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS FIRMES DERIVADAS DE
UN PROCESO PENAL BASADO EN PRUEBA FALSA O CON VIOLACIÓN DE
FUNCIONES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, COMO EXCEPCIÓN AL
PRINCIPIO DE COSA JUZGADA"

INVESTIGADOR:

ABG. ALEX IVAN TONGO NAVARRO

ASESOR:

DR. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO

LAMBAYEQUE, 2021

LA REVISIÓN DE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS FIRMES DERIVADAS DE UN PROCESO PENAL BASADO EN PRUEBA FALSA O CON VIOLACIÓN DE FUNCIONES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA

INFORME DE ORIGINALIDAD

15%	14%	2%	9%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

ENCONTRAR COINCIDENCIAS CON TODAS LAS FUENTES (SOLO SE IMPRIMIRÁ LA FUENTE SELECCIONADA)

11%

★ idoc.pub

Fuente de Internet

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 15 words

Excluir bibliografía

Activo